

# PáginaRoja

El periódico de Corriente Roja

Nº68

febrero 2021

Donativo 1'00€

TERCERA OLA...

# Y LA SANIDAD SIGUE IGUAL

## INTERVENCIÓN DE LOS RECURSOS PRIVADOS

## REFUERZO INMEDIATO DE LA SANIDAD PÚBLICA



# ABOLICIÓN DE LA JUSTICIA MILITAR Y SUPRESIÓN DE LOS TRIBUNALES MILITARES

Caps  
Madrid

“No queda más remedio que fusilar a 26 millones de hijos de puta”. Este es uno de los conocidos mensajes que intercambiaron altos cargos retirados del Ejército.

Parte de ellos publicaron una carta abierta al Rey alertando del peligro que corre “la unidad nacional”. Días después, aparecía un manifiesto firmado por más de 400 militares advirtiendo contra “el deterioro de la democracia” y en el que se afirma que la “unidad de España está en peligro”.

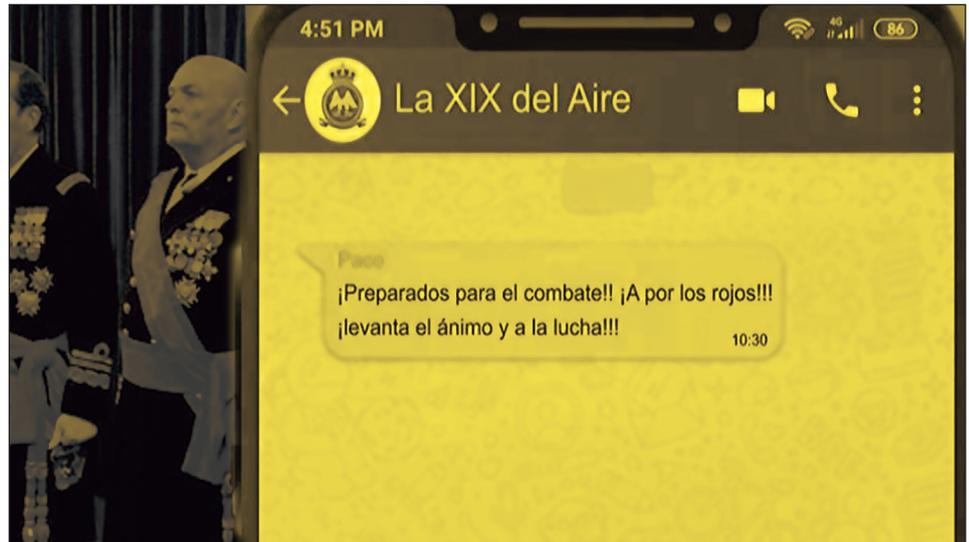
La respuesta de la titular de Defensa ha sido declarar sobre las Fuerzas Armadas que “Su conducta ejemplar nada tiene que ver con manifestaciones que repugnan al respeto debido en una sociedad democrática”. Para la ministra hay que “salvaguardar la honorabilidad de las Fuerzas Armadas” y no consentirá que una “minoría” de militares retirados “mancillen la imagen de las Fuerzas Armadas”. Para el gobierno PSOE-UP se trata de algo marginal cuyo mayor delito es empañar a las ejemplares FFAA y al Rey.

El problema es que estos comportamientos nunca faltaron desde la muerte del Dictador. Baste recordar el 23F. En 2006, en pleno debate del Estatut, el Teniente General Mena Aguado afirmó que si algún Estatuto de autonomía sobrepasara los límites de la Constitución, el Ejército tendría que intervenir. Cabe recordar que Mena no era un “nostálgico sin mando”, tenía a sus órdenes directas más de 44.000 soldados.

En 2018 un nuevo manifiesto firmado por 1.000 militares reclamaba “respeto y desagravio” a Francisco Franco. El pasado diciembre se publicaba un vídeo en el que se ve a soldados en maniobras de marcha mientras cantaban una canción sobre la División Azul. Poco después, La Marea publicó un vídeo de una fiesta celebrada en el cuartel de la Brigada Paracaidista en el que aparece un grupo de militares realizando el saludo nazi.

Los pronunciamientos, cartas, amenazas de los militares, lejos de ser un problema con una minoría retirada, reflejan la esencia del régimen monárquico y su ejército.

Las elecciones muestran también cómo



Captura de uno de los mensajes de Whatsapp en el grupo de militares.

la extrema derecha crece en las FFAA. Vox supera en el 85% de los cuarteles el promedio de los votos obtenidos a nivel general. En los cuarteles el voto a la derecha y extrema derecha sumó el 56,2% de los votos, 14 puntos más que el reflejado en el conjunto de las elecciones.

## La persecución de toda reivindicación democrática en las FFAA.

La fraudulenta “transición democrática” preservó el aparato militar y policial del franquismo. Eso fue posible por la represión dentro de los cuarteles, comisarías y comandancias. La Unión Militar Democrática nació en 1974 con el objetivo de “democratizar las Fuerzas Armadas y derrocar la dictadura”. Sus promotores fueron procesados y condenados a 43 años de prisión y la expulsión del ejército. Nunca se les restituyó como militares.

En 1986, un cabo de la Guardia Civil intentó crear legamente una Asociación para lograr mejoras en las condiciones y desmilitarizar el Cuerpo. Desde entonces un total de 22 expedientes disciplinarios, una decena de detenciones y diez años entre rejas son las cifras cosechadas por el cabo Rosa.

El pasado diciembre, el Tribunal Militar Central rechazaba el recurso interpuesto por Marco Antonio Santo, cabo expulsado por encabezar el manifiesto “en contra del franquismo en las Fuerzas Armadas”. La expulsión fue firmada, rubricada y públicamente defendida por Margarita Robles, la actual ministra del Ejército del Gobierno PSOE-UP.

## Una “Democracia” donde los militares tienen sus propios tribunales

¿Es posible que alguien coloque 127 kilos de cocaína en un barco de guerra y nunca se sepa quién ha sido el responsable? En el caso del El Cano, el buque escuela de la Armada española, sí. La Justicia Militar sentenció textualmente que “la falta de vigilancia ha hecho imposible identificar a los culpables”.

Basta repasar algunos casos de la justicia militar: el saqueo a un Colegio Mayor del Ejército, en el que oficiales desviaron fondos. Pese a ser condenados, ni entraron en la cárcel ni perdieron su empleo. A los 80 pilotos del Ejército que presentaron facturas falsas, la Fiscalía Militar les ofreció un pacto, y todos mantuvieron su carrera militar y no pisaron la cárcel. Añádase el escándalo de corrupción en el Hospital Militar Gómez-Ulla de Madrid con pagos a cambio de concesiones y prostitución; o el de las Asesorías de militares a cambio de Audis y Mercedes...

Prevalecen los Tribunales Militares, que en otros países de Europa fueron abolidos hace años, y que aseguran la impunidad con la que el Ejército español se fue moldeando como una Guardia Pretoriana, al estilo del que servía de escolta a los emperadores romanos, de reyes y dictadores.

El Monarca en sus alocuciones reitera que “la justicia debe ser igual para todos” ¿Qué principio democrático ampara entonces que los militares tengan sus propios Tribunales? La abolición de la Justicia Militar y la supresión de los Tribunales Militares es una reclamación democrática elemental.



Lee y difunde este periódico

Este periódico, en su modestia, pretende ser una herramienta al servicio de la lucha de clases, de las movilizaciones y la organización de la clase trabajadora y de la juventud.

El periódico que tienes en tus manos está por lo tanto a tu servicio, al servicio de la lucha en tu centro de trabajo, de estudio o localidad.

Es una herramienta que queremos construir entre todos/as y para todos/as.

Página Roja es una propuesta a la cual esperamos que te sumes no solamente como lector/a sino también como participante activo de esta tarea, suscribiéndote al periódico difundiéndolo y/o enviándonos información y crónicas.

Pide al compañero o compañera que te ha pasado el periódico, tu suscripción en Página Roja, o bien haznos llegar tu petición a [contacto@corrienteroja.net](mailto:contacto@corrienteroja.net).

Página Roja es el órgano de expresión de Corriente Roja, sección de la LIT-CI en el Estado Español

FEBRERO 2021 — NÚM. 68

**Consejo Editorial** Felipe Alegría, Angel Luis Parras, Juan Montano, Gema Vilches

**Diseño y Maquetación** Comisión de Comunicación

**Depósito Legal** SE-7816-2011

**Sede Central** C/ Cáceres 49, Madrid

**Web** <http://www.corrienteroja.net>,  
<http://www.correntroig.org>,  
<http://www.litci.org>

**Facebook** <http://fb.me/Corriente.Roja>, <http://fb.me/Corrient.Roig>, <http://fb.me/Corrente.Vermella>

**Twitter** @corrienteroja, @correntroig

# FONDOS DE RECUPERACIÓN DE LA UE

AL SERVICIO DEL IBEX 35 Y CONTRA LA CLASE OBRERA Y EL MEDIO AMBIENTE

El gobierno de coalición aprobó recientemente el Real Decreto-Ley por el que se establece cómo se repartirán los 140.000 millones de € de fondos europeos que llegarán al Estado español. Estos fondos, se tramitarán a través de los ERTes, acuerdos de colaboración público-privada. De nuevo, miles de millones de fondos públicos que van a parar a las arcas de los gerifaltes del IBEX 35.

Hay multitud de cuestiones sociales a las que podrían destinarse esos fondos: reforzar la Sanidad y la Educación, promover el empleo público de calidad, evitar desahucios y cortes de luz, reforzar los programas de asistencia social... Sin embargo, irán a parar a las manos de Endesa, Iberdrola, Inditex, Repsol, el Corte Inglés o las grandes constructoras. Quienes más levantan la voz contra “las paguitas” y “los subvencionados” para azuzar contra las miserables ayudas sociales, siempre olvidan mencionar estas mamandurrias de miles de millones para corporaciones que año tras años tienen beneficios multimillonarios.

El gobierno de coalición PSOE – UP vuelve a mostrar su sumisión absoluta a la patronal, y deja en sus manos la “reconstrucción” del país. No por casualidad, el plan finalmente aprobado es un calco del presentado por la CEOE.

## A cambio: contrarreformas laborales y de pensiones y desregulación ambiental

Tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias presentaron esta inyección como un giro social de la UE, en contraposición con sus políticas de ajuste anteriores. Ambos anunciaron que los fondos llegarían sin ninguna condicionalidad impuesta. Pero una vez más, el discurso no concuerda con los hechos.

El reglamento europeo de reparto de los fondos establece claramente que éstos no se desembolsarán hasta que los Estados hayan acometido las reformas estructurales impuestas por la UE. Para el Estado español, especialmente, otra vuelta de tuerca a las pensiones y la reforma laboral: bajada de las pensiones públicas y mayor flexibilidad laboral.

Nadia Calviño, ministra de economía, ya ha comparecido ante la UE para explicar los planes del gobierno de coalición, recibiendo un entusiasmado aplauso de las instituciones europeas. Con eso, ya sabemos hacia dónde caminan las reformas que el gobierno aplicará.

La propaganda gubernamental pone especial énfasis en publicitar que estos fondos servirían a la transición ecológica de la economía española. Sin embargo, la normativa establece justo lo contrario. Se debilita la ya de por sí escasa regulación ambiental. Concretamente, se reforma la Ley de Evaluación Ambiental, acortando los plazos de evaluación ambiental y flexibilizando normativas de control de contaminación y emisiones.

## Nuestra respuesta: unidad, lucha, movilización

La dramática situación sanitaria y social actual, la crisis económica que se está abriendo y las políticas que el gobierno pre-anuncia con este acuerdo europeo, nos hacen esperar lo peor. Si la crisis de 2008 fue un duro golpe a la clase trabajadora, estamos recibiendo el segundo ataque, peor aún que el primero.

Sin embargo, a diferencia de aquel momento (en el que vivimos grandes movilizaciones como la de las Marchas de la Dignidad, las huelgas generales o el Rodea el Congreso) hoy impera una respuesta débil y atomizada. Sin duda, la pandemia dificulta la movilización, pero no es la única responsable de la desmovilización.

La izquierda institucional hoy forma parte o está comprometida con el gobierno, y juega un papel apaciguador. El sindicalismo oficial, CCOO y UGT, también viene colaborando activamente con el gobierno, y por primera vez ahora en febrero convocan unas tímidas protestas.

Confiar en ellos es pelear con las dos manos atadas a la espalda, la garantía más segura de derrota. Es momento de levantar una alternativa a esta “izquierda del mal menor” que se niega a luchar “para no hacer el juego a la derecha”. ¡Lo que hace el juego a la derecha es una izquierda que arruina a la clase trabajadora; esa es la mejor receta para que la demagogia de Vox cale en nuestra gente!

En Corriente Roja apostamos por reforzar cada huelga, cada movilización vecinal y cada protesta estudiantil. Pero, además, es necesario darle a cada conflicto una visión amplia y general. Hace falta construir la unidad en un frente social de lucha que unifique a sindicatos, asociaciones y movimientos sociales bajo una iniciativa que combata las políticas capitalistas del gobierno PSOE -UP y cierre el paso a la derecha.

# FRENTE A LA SUBIDA DE LA LUZ... ¡NACIONALIZACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS Y ENERGÉTICAS!



Los tuits no se los lleva el viento.

**Alfredo**  
Madrid

En enero se sufrió una ola de frío y grandes nevadas. En mitad de la “tormenta perfecta”, las compañías eléctricas no tuvieron el más mínimo reparo en subir el recibo de la luz un 27% (con cientos de miles de personas en situación de ERTE y comenzando una oleada de despidos), y cortando también la luz a miles de personas en la Cañada Real.

En enero de 2020 la pobreza energética reflejaba un alza respecto al año anterior – un 9,1% de afectad@s, frente al 8% en 2019–, según los últimos datos de Eurostat, aunque todo indica que la pandemia y la crisis asociada habrán empeorado esas cifras.

Desde Corriente Roja, pensamos que la única salida para evitar este atropello que sufrimos la clase obrera es la nacionalización de las compañías eléctricas y energéticas, para ponerlas al servicio y bajo control de los y las trabajadoras.

## Un gobierno “de progreso”... al servicio de las burguesías del sector energético

Es curioso que esta subida del recibo de la luz se produzca con un gobierno que se hace llamar progresista y que durante toda la pandemia no para de llenarse la boca repitiendo que “no dejaremos a nadie atrás”. Se deben referir que no dejen a nadie atrás de los y las que puedan seguir pagan-

do la factura de la luz para que esas empresas puedan seguir colocando en sus sillones a los amiguetes de las diferentes formaciones políticas.

El propio Gobierno, en los últimos indicadores publicados de pobreza energética (2019) reconocía que un 16,7% de los hogares tenía un gasto energético desproporcionado y que un 7,6% de la población tuvo problemas para calentar sus viviendas.

Sólo hay que revisar las declaraciones que hicieron PSOE y Unidas Podemos cuando con el gobierno del PP hubo un incremento de la factura de la luz en torno al 10%. El líder del PSOE, Pedro Sánchez escribía que “La subida de la luz del 8% prueba el fracaso de la reforma eléctrica de Rajoy, y alerta del riesgo de más gente sufriendo pobreza energética”. Y el líder de la otra pata del gobierno de progreso, Pablo Iglesias, decía esto otro: “Disparar la factura de la luz un día como hoy sólo demuestra la codicia de las eléctricas. Si el Gobierno lo consiente, será cómplice”.

Un gobierno de progreso que creó un Ministerio de Consumo, en el que puso al frente a Alberto Garzón referente “comunista”, se supone para evitar la especulación de los precios y tarifas...pero que ha sido incapaz de evitar este alza del precio de la luz, así como tampoco acometió ninguna bajada de impuestos a productos socio-sanitarios, paró la especulación de los productos básicos, los precios de la vivienda, los servicios básicos, etc...

## La patronal energética nunca pierde

Al igual que la célebre frase “la banca nunca pierde”, pasa lo mismo con las empresas energéticas, ellas no van a perder ni un solo céntimo en favor de la clase obrera.

El funcionamiento del mercado mayorista de electricidad fija un mecanismo que genera lo que se denomina “beneficios caídos del cielo”, que son del orden de 700 millones de euros al año en término medio desde el año 1997.

## El corte de luz de la Cañada Real

No podemos cerrar este artículo sin hablar de lo que está ocurriendo con las más de 4000 familias que viven en la Cañada Real. Durante más de 25 años, las compañías que suministraban la luz han cortado a cada poco el suministro. Ahora han vuelto a hacerlo cuando atravesábamos una de las mayores olas de frío que hemos conocido en los últimos tiempos.

Naturgy ha cortado el suministro sin ningún tipo de escrúpulos, dejando a miles de familias con menores sin ningún medio para calentarse, ni para la subsistencia, o simplemente para que los chavales y chavalas en edad escolar pudieran estudiar.

No sólo Naturgy es la única responsable. Todos los gobiernos, central, autonómico y municipales están siendo cómplices de esta aberración, al no dar ningún tipo de salida a las familias de la Cañada y mirar hacia otro lado con lo que está haciendo Naturgy.

# DEFENDER LAS PENSIONES DE HOY Y MAÑANA

Antoñito  
Madrid

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 19 de noviembre el Informe de reforma del Pacto de Toledo, que realiza una serie de recomendaciones.

**Separación de Fuentes:** Antes no había distinción entre pensiones contributivas y no contributivas. Para ambas se recurría a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). A partir de ahí resolvieron separar las fuentes de financiación, de forma que las pensiones contributivas dependieran de las cotizaciones sociales. En la recomendación número uno no se opta por lo que sería más lógico: volver a la situación previa. En su lugar, se opta en avanzar por el mismo camino.

**Poder adquisitivo:** Defiende en su recomendación dos “el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, su garantía por Ley”. Sin embargo, eso no obliga a revalorizar las pensiones con el IPC. Partiendo del bajo nivel de las pensiones dejar las cosas como estaban en lo referente a las subidas anuales, no es más que una toma de pelo.

**Prolongamiento de la edad de jubilación:** La recomendación número 12 pretende fomentar la permanencia de l@s trabajador@s en activo, para que la edad real de jubilación (por encima de los 64 años en estos momentos) se aproxime a la legal (65 años y 10 meses en 2020, serán 67 años en 2027), mientras que en la 17 (bis) se habla de la precariedad y el subempleo juvenil y se reconoce que “Los jóvenes se ven especialmente perjudicados por la precariedad y el subempleo, lo que dificulta generar amplias carreras continuas de cotizaciones”. Teniendo en cuenta esto ¿No sería más lógico dejar paso a l@s trabajador@s jóvenes incentivando por ejemplo los contratos de relevo?

**Brecha salarial y de género:** Hay otras recomendaciones en el documento como la 13 y la 17, donde no se concretan propuestas reales para paliar la brecha de género en las pensiones ni se arbitra ninguna medida concreta más allá de la palabrería habitual.

**de las pensiones:** Pero sin lugar a dudas la recomendación número 16 es la clave: la promoción de los fondos de pensiones privados dentro de las empresas. El planteamiento es que si el trabajador individual no puede o no quiere abrir un plan privado, obliguémosle a aceptar uno en el que las aportaciones se hagan sin su intervención. La idea es que las empresas y los comités de empresa lleguen a acuerdos para suscribir un plan de pensiones colectivo para tod@s l@s trabajador@s de la empresa con el beneplácito de los sindicatos CCOO y UGT, que tienen a su vez intereses económicos en estos planes privados de pensiones de empresa. Es el primer paso para implantar la mochila austriaca. Algo que por otra parte ya existe en el País Vasco con las llamadas EPSV (Entidades de Previsión Social Voluntaria).

## Los ataques a las pensiones públicas vienen de lejos

En los últimos años hemos sido testigos de cómo el PSOE con la complicidad de CCOO y UGT han ido aprobando diferentes reformas que suponían un ataque directo contra las pensiones públicas. Una senda que posteriormente tomaría Rajoy con la Reforma de 2013. Ahora de nuevo vuelven a la carga y en esta ocasión junto a Unidas Podemos, en nombre de lo que ellos han denominado “el gobierno más progresista de la historia”, tratan de convencernos de las “bondades” de estas recomendaciones para reformar las pensiones. Atrás quedan ya las promesas de Unidas Podemos.

## Salir a la calle para asegurar las pensiones de hoy y de mañana

Ante los nuevos ataques que ya se anuncian no hay otra salida que responder y seguir movilizándose en la calle. La lucha decidida y la unidad de acción alrededor de la defensa de una tabla reivindicativa que responda a los verdaderos intereses de los pensionistas y la clase obrera, se convierte en una tarea clave para derrotar los planes que hoy amenazan seriamente las pensiones públicas.

Una lucha que no puede quedar reducida solamente a l@s pensionistas y que debe integrar también a l@s trabajador@s en activo y a l@s jóvenes que son en verdad l@s más afectadas por estas nefastas reformas.

- ▶ No al pacto de Toledo.
- ▶ Derogación de las Reformas Laborales y de pensiones de 2011 y 2013.
- ▶ Pensiones garantizadas por los Presupuestos Generales del Estado.
- ▶ Pensión mínima de 1084 euros ¡Ya!
- ▶ Revalorización automática de las pensiones con el IPC.
- ▶ Ni planes privados ni mochila austriaca.
- ▶ Desaparición de la brecha de género en las pensiones.
- ▶ No a la Reforma Escrivá. ¡Escrivá dimisión!



\*Gobierno quien gobierne, las pensiones se defienden\*.

**Transferir a manos privadas la gestión**

# COVID-19: SUMA Y SIGUE, ¡LO PEO

LLEGÓ LA TERCERA OLA, SIN HABER DERROTADO NUNCA LA SEGUNDA.



Durante estos meses han habido movilizaciones por parte del personal sanitario.

Laura  
Málaga

En plena tercera ola, las cifras de contagios baten récords diarios y el número de ingresos se desboca. Las camas estructurales de UCI en muchos hospitales se encuentran ya a más del 90% de su capacidad, obligando a suspender de nuevo operaciones no urgentes o a poner en marcha “hospitales de campaña”. Una presión que como sabemos, se agravó tras el paso de Filomena en los primeros días, con el aumento de los accidentes en la calle, los problemas de acceso a los centros o los de suministro eléctrico.

Pese a que volvimos a cifras de marzo y a la gravedad de la situación, Illa descarta un confinamiento domiciliario, siquiera parcial como entonces, porque dice que “no hizo falta para derrotar la segunda ola”. Pero está faltando a la verdad, ya que aquella nunca llegó a ser derrotada. Lo único que hicieron fue bajar los contagios, sin salir del umbral de riesgo. Prueba de ello es que el 10 de diciembre comenzaron a subir. Pero había que asegurar los beneficios empresariales (“salvar la Navidad”) e impulsaron una desescalada con medidas imprecisas, contradictorias e insuficientes, centradas en el ocio y la vida social. Para “quitarse el muerto de encima” y poder volcar la responsabilidad en la población, que “lo ha pasado demasiado bien” con la expectativa de las vacunas y las celebraciones navideñas.

Asistimos por tanto a una tercera ola que se solapa con la segunda de la que nunca salimos y ahora pagamos las consecuencias. Es la clase trabajadora quienes sufrimos haciendo los mayores sacrificios y seguimos poniendo l@s muert@s de esta catástrofe sanitaria y social.

## Más sufrimiento y sacrificios... ¡sólo para la clase trabajadora!

Nuevamente se endurecen las restricciones a la movilidad y al ocio, mientras los políticos y gobernantes se enredan en discusiones estériles sobre el horario del toque de queda, cuya efectividad no está demostrada o exigen con la boca pequeña un confinamiento domiciliario a la carta (“inteligente”).

Pero unos meses después, Ni una palabra de reforzar el sistema sanitario para librar una verdadera guerra contra el virus y acometer de forma rápida y efectiva el plan de vacunación que hay por delante.

Eso sin hablar de que sigue sin haber el más mínimo balance o evaluación seria sobre los tratamientos y medidas que se están aplicando. Por ejemplo no hay evidencia de que “confinar” los barrios más afectados mientras continúan los desplazamientos por motivos laborales sirva de algo, más que para estigmatizar a sus habitantes y generar más crispación social.

En Madrid, en vez de contratar personal, continúan los traslados forzosos al nuevo hospital “Isabel Zendal”, que pese a su nombre, no es sino un almacén para personas enfermas. Como han denunciado el personal sanitario y algún/a paciente, no reúne siquiera el requisito primordial de garantizar una higiene adecuada. Faltan protocolos, servicios y material básico.

## Residencias: ¿Qué ha cambiado?

El coronavirus se ha cobrado en las residencias la vida de al menos 25.000 personas, según datos procedentes de las mismas CCAA. La gran mayoría de estos ancianos/as, aunque no tod@s, murieron en residencias privadas. Ello significa en torno al 51,2 % de las muertes notificadas oficialmente por el Ministerio de Sanidad. Actualmente hay 441 diligencias abiertas en el ámbito penal desde marzo, de las que 229 se encuentran en trámite.

Y mientras el gobierno sigue sin intervenir las residencias privadas, un informe de Amnistía Internacional (AI) denunció la situación en las residencias de ancianos durante la segunda ola de la pandemia, que seguía siendo “alarmante”, ya que “no se están derivando a los pacientes a hospitales, no se garantizan las visitas de familiares, ni se ha reforzado siquiera el personal como se debiera”.

# R NO PASÓ!

## ¡Por un proceso y un plan de vacunación 100% público, transparente y eficaz!

Para la burguesía es primordial controlar el virus sin confinamientos que paralizan la economía e impiden la acumulación de capital y de lucro. Es esto lo que explica la investigación y producción en tiempo récord de una vacuna contra el SARS-CoV-2, mientras que muchas otras enfermedades son dejadas de lado.

## ¿Velocidad de crucero con un barco “que hace aguas”?

El 27 D se puso en marcha un plan de vacunación que será escalonado, debido a la falta de medios para administrar las vacunas y a la escasez de unidades. En la primera etapa de enero a marzo prevén inmunizar a 2,5 millones de personas entre residentes, personal sanitario, socio-sanitario y grandes dependientes no institucionalizados. Una cifra ínfima todavía. Y aunque gracias al esfuerzo titánico del personal sanitario, se ha logrado aumentar el ritmo de vacunación, desesperante en los primeros días, a fecha de 21 de enero sólo 15.642 personas habían recibido las dos dosis, necesarias para alcanzar la inmunidad. No hay por tanto seguridad alguna de que logren llegar al 70% de la población de aquí al verano, como anunció el gobierno.

En plena tercera ola, los centros de Atención Primaria no dan abasto para llevar a cabo esta tarea. A esto se suma un menor número de dosis de las inicialmente previstas, por un problema de producción de Pfizer, aunque en contrapartida llegaron las primeras de Moderna. Pero no podemos descartar más retrasos en la producción y distribución de las vacunas por parte de laboratorios privados, que se rigen únicamente por su beneficio económico.

Con este panorama, saltó el escándalo de que más de 450 altos cargos y funcionarios/as de la Consejería murciana de Salud, incluyendo su consejero, recibieron la primera dosis saltándose el protocolo de vacunación del Ministerio de Sanidad. A esta lista que no ha parado de crecer se unen dos gerentes de los hospitales de Basurto y Santa Marina en Bizkaia, varios alcaldes de distintas for-

maciones políticas, el Jemad (Jefe de Estado Mayor de la Defensa) y un teniente coronel de la Guardia Civil.

Tampoco hay supervisión directa de la vacunación en grandes empresas del sector residencial, que tienen sanitarios en sus plantillas. En algunas residencias ligadas a la Iglesia Católica también se han detectado vacunaciones de forma irregular. Mientras, en las residencias de Madrid, cuatro de cada diez personas aún no recibieron la primera inyección aunque la Comunidad ha empezado ya con el suministro de las segundas dosis de la vacuna.

## A vueltas con la privatización de los servicios

Para acelerar el ritmo, Ayuso volvió a contratar a dedo a Cruz Roja, pagando más de 800.000 euros por 25 profesionales, lo que le ha costado muchas críticas. Ya otras CCAA, como Andalucía, están haciendo lo mismo. Pero no sólo se privatiza el proceso de vacunación.

El Ministerio de Sanidad ha adjudicado contratos millonarios a grandes empresas para que se encarguen de la distribución, administración, seguimiento, rastreo y registro de las personas vacunadas, con la excusa de que “el ministerio carece de los medios humanos suficientes con la especialización técnica que se requieren para la prestación del servicio”.

En vez de hacer una masiva inversión y contratación pública del personal administrativo, técnico o informático que sea preciso, se vuelve a recurrir a la gestión privada, por procedimiento de urgencia y sin publicidad (a dedo). La más beneficiada es Indra, que se lleva casi un millón de euros ingresados. Una empresa que irónicamente fue galardonada “por su responsabilidad social”, pero que en plena pandemia llevó a cabo un ERE el pasado diciembre que echó a la calle a 805 trabajadores/as sin que el gobierno moviese un dedo pese a ser una empresa semipública. Esta política de subcontratar servicios públicos, es la misma que han llevado a cabo todos los gobiernos anteriores.

## ¡Por un Plan de Choque Sanitario!

En medio del sufrimiento y la desesperación, empresas, laboratorios y también la sanidad privada, que no ha dejado de hacer PCR's y a la que tras meses en lista de espera, recurren muchas personas a costa de endeudarse, ven incrementados sus beneficios y se están haciendo de oro con la gestión de esta pandemia. Mientras, la Sanidad pública ¡se desangra! Con un personal mermado por las bajas laborales y agotado tras casi un año de sobre esfuerzo continuo. Este 2021, el gasto militar vuelve a aumentar y triplica el de la investigación sanitaria.

Necesitamos un plan estratégico que pase por reforzar la Atención Primaria y especializada y la única forma de lograrlo es movilizándonos. Porque hoy es la Covid, mañana puede ser cualquier otra pandemia o el impacto sanitario de una catástrofe ambiental. Algo en absoluto descartable en esta crisis ecológica global a la que el

capitalismo nos ha llevado.

Por todo ello, hay que seguir exigiendo:

- ▶ ¡Inversión masiva en Sanidad pública, con refuerzo técnico y la contratación pública del personal suficiente en condiciones laborables y salarios dignos!
- ▶ ¡Intervención estatal de los laboratorios y de la sanidad privada!
- ▶ ¡Remunicipalización y vuelta a manos públicas de residencias y resto de servicios socio-sanitarios!
- ▶ ¡Vacunas gratuitas para todas y todos, poniendo en marcha los recursos que sean necesarios!

# ¡SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LOS EXÁMENES PRESENCIALES!

¡RECURSOS PARA LA UNIVERSIDAD PÚBLICA, GRATUITA Y DE CALIDAD!



Situaciones de aglomeración en exámenes presenciales en la UB y UAB han conducido a protestas por su suspensión.

Lu.  
Catalunya

**2021** ha empezado con un dramático aumento de casos de coronavirus, y con la saturación, de nuevo, de la Sanidad Pública.

En medio de este panorama, se están realizando los exámenes finales universitarios en varias comunidades, y en muchos casos de forma presencial. Ya son diversas facultades, como por ejemplo algunas de la Universitat Autònoma de Barcelona o de la Universidad Autònoma de Madrid, en las que los y las estudiantes nos hemos empezado a organizar para mostrar el rechazo a esta situación. No entendemos cómo es posible que, en un momento como el actual se siga manteniendo la presencialidad de las pruebas evaluativas.

Tras la criminalización que ha habido hacia la juventud durante este pasado año, donde se nos ha señalado como irresponsables y culpables del aumento de contagios, y tras unas Navidades en la que se han mantenido unas duras restricciones, se nos obliga a asistir a exámenes presenciales. Exámenes con aforos que pueden llegar a superar los 60 alumn@s por aula, donde las distancias de seguridad son inferiores al metro y medio, a los que tenemos que asistir en un transporte público abarrotado.

Los rectores de diferentes provincias se excusan en que, las autoridades sanitarias no han indicado que sea necesario volver a la virtualidad, y que por lo tanto la situación "no es tan grave y las universidades son espa-

cios seguros". Pero aquí la pregunta es, si hay posibilidades de hacer exámenes virtuales y disminuir así el riesgo de contagio, ¿a qué se debe esta cabezonería de querer hacer las evaluaciones presenciales?

Por una parte, se quiere prevenir que l@s alumn@s "copiemos". Este argumento no podría justificar en ningún caso poner en riesgo nuestra salud y la de l@s nuestr@s. Nos encontramos en un semestre en el que no se ha garantizado una docencia de calidad en muchas universidades, y con un sistema educativo recortado hasta las trancas que sigue manteniendo métodos de evaluación del siglo pasado. Ni se inyectan recursos a la pública ni se ponen facilidades para hacer evaluaciones que se ajusten a las dificultades que estamos viviendo l@s alumn@s de clase trabajadora en el momento actual.

Por otro lado, y este es el motivo principal de fondo, no hay recursos para hacer los exámenes virtuales sin dejar a nadie atrás. La UAB, junto a otras muchas universidades públicas como la UAM, lleva años avisando de su difícil situación económica, arrastrando 65M de déficit. Es fácil intuir que a duras penas podría garantizar el gasto que supondría facilitar, a todos l@s alumn@s que lo necesitaran los recursos suficientes para hacer los exámenes virtuales. Incluimos aquí no solamente recursos tecnológicos, sino también habitacionales para aquell@s estudiantes de familias desahuciadas, o sin un espacio propio para estudiar o con convivientes contagiad@s de COVID-19.

Por eso, desde Corriente Roja decimos alto y claro NO a los exámenes presenciales. De-

bemos ser l@s profesor@s junto a l@s alumn@s l@s que decidamos qué alternativas de evaluación se ajustan mejor a la situación de crisis sanitaria y económica, que están muy lejos de estar controladas. Además, exigimos al "gobierno más progresista de la historia" un aumento drástico de recursos en la educación pública, para poder asegurar que todos los y las estudiantes estemos en igualdad de condiciones frente a las evaluaciones finales.

Este aumento drástico es imposible sin la reversión de los recortes en la educación de los pasados años, sin la incautación de la educación privada a manos de la pública y sin declarar el impago de la deuda pública que consume actualmente casi el 9% de nuestro PIB en los presupuestos anuales.

Entendemos que las condiciones y la falta de un movimiento estudiantil fuerte, masivo y organizado en las universidades dificultan tremendamente la organización de una huelga de exámenes. Aun así, los y las delegadas y activistas que durante estas semanas nos hemos puesto a la cabeza de denunciar esta situación en redes y medios, y escribir comunicados de protesta a los rectorados y decanatos de nuestras universidades, debemos continuar organizando la respuesta colectiva, planificando desde nuestras clases acciones junto a nuestr@s compañer@s y votadas democráticamente. Cualquier acción de protesta que hagamos codo a codo junto a nuestr@s compañer@s de clase, es un paso más en la construcción del movimiento estudiantil que necesitamos y necesitaremos en los próximos años.

# Ley Celáa

## Otra ley educativa más, para que todo siga igual

Tània  
Catalunya

Una de las grandes medallas de las que ha presumido el gobierno de PSOE-UP al hacer el balance del año ha sido la aprobación de la nueva ley educativa LOMLOE, conocida como “Ley Celáa”. La Moncloa pretende vender este nuevo decreto como una gran victoria, aprovechando que la comunidad educativa lleva años reclamando la derogación de la anterior ley aprobada por el gobierno de Rajoy (la famosa LOMCE o Ley Wert).

Si bien es cierto que las propuestas más descabelladas de la ley del PP se retiran por fin (como las famosas reválidas, el castellano como lengua vehicular o el menosprecio hacia las asignaturas “no troncales” como arte o filosofía), la LOMLOE sirve para poco más que para recuperar con modificaciones el texto aprobado por el gobierno socialista en 2006, la LOE (Ley Orgánica de Educación). De hecho, podríamos decir que la mayor conquista de la nueva ley Celáa son los abucheos y rabietas sin sentido de la derecha y la Iglesia, porque aparte de eso, poco más hemos conseguido.

Esta ley deja los puntos clave del sistema educativo tal y como estaban, y no reconoce ninguna de las reivindicaciones que el movimiento estudiantil ha venido exigiendo los últimos años. En sus partes más progresivas, no es más que un listado de propuestas esbozadas como posibilidades sin definición

ni presupuesto de ningún tipo. En definitiva, un texto más que se añade a la interminable lista de leyes educativas que se han aprobado en los últimos años y que, como todas las anteriores, queda muy lejos de garantizar una educación 100% pública y gratuita, de calidad y en igualdad.

En primer lugar, lo de educación 100% pública ni se contempla. El Estado español es el país con más escuelas concertadas de la Unión Europea, siendo el 30%, frente a la media del 14,3% de la UE. Los centros católicos, el 60% de los concertados, reciben cada año 4.866 millones de euros. Nada de esto cambiará, el drama teatral organizado por la derecha y la concertada es puro teatro, seguiremos pagando entre tod@s para que unos pocos hagan negocio con la educación robándole recursos a la pública.

Por un lado, la ley aprobada no se propone en ningún caso reducir los ratios, lo que es una medida imprescindible para garantizar una educación de calidad. Continuaremos siendo 25 alumn@s por docente en primaria, 30 en secundaria y 35 en Bachillerato, desoyendo por completo a la comunidad educativa incluso ahora que el COVID ha hecho aún más evidente la barbaridad que es tener 30 estudiantes en clase. La reducción de la ratio conlleva necesariamente la contratación de un número significativo de docentes, algo de lo que por supuesto tampoco se habla. De manera que, en la práctica, se pretende “enriquecer el currículo” sin los recursos humanos y materiales necesarios para ello y con un pro-

fesorado sobrecargado.

Pese a que la lucha por una educación en igualdad ha arrastrado a millones de estudiantes a las calles en los últimos años, tampoco se asume está reivindicación. En el texto se repite la intención de trabajar desde una “perspectiva de género”, pero esta afirmación no sólo no se concretiza sino que se contradice con otras partes del texto mucho más explícitas. La Iglesia continuará omnipresente en las aulas, pues se reconoce el derecho de los padres a que sus hij@s reciban una educación en concordancia con sus creencias religiosas y la segregación por sexos se podrá financiar con dinero público. Incluso será obligatorio para los centros públicos ofrecer la materia de religión. Se trata de una enorme irresponsabilidad por parte del gobierno de PSOE-UP, pues estas medidas no sólo podrían permitir plantear nuevos “Pines parentales” sino que continúan sin garantizar una educación sexual y afectiva en igualdad y para la diversidad. Dejando la salud y la vida de las jóvenes y LGTB sin protección ni acompañamiento.

“Esto nos pasa por un gobierno facha” era una de las consignas más repetidas en las movilizaciones durante el gobierno de Rajoy, pero ni siquiera el gobierno “más progresista de la historia” garantiza una educación pública de calidad si la movilización en la calle no le obliga. Por eso, hoy más que nunca es necesario recuperar la fuerza de la comunidad educativa organizándola.



La Educación Privada y Concertada se moviliza contra la Ley Celáa.

# DECRETO “ANTIDESAHUCIOS”

UNA EXCUSA PARA RESCATAR A LA BANCA, FONDOS BUITRES Y GRANDES PROPIETARIOS SIN ACABAR CON LOS DESAHUCIOS

Ax.

Catalunya

El pasado diciembre, el Gobierno publicó un Decreto-ley mediante el cual afirmaba poner punto y final a los desahucios durante el Estado de Alarma. Esta noticia ha sido motivo de alegría para buena parte de las familias afectadas y activistas que vieron como la reivindicación central del movimiento por la vivienda parecía estar a punto de cumplirse.

Según el Decreto-ley, los desahucios provocados por impagos de alquileres e hipotecas quedarían paralizados, así como los derivados de okupaciones, estos últimos si se demuestra que dentro de la unidad habitacional conviven personas dependientes, menores o víctimas de violencia machista. Así mismo, se garantiza el suministro de agua a las consumidoras más vulnerables.

Pero no han hecho falta demasiados días para ver como, una vez más, nos encontramos ante una medida que ni erradica los desahucios ni soluciona la cronificación de la crisis habitacional o cortes de suministros.

Y es que no haga falta indagar demasiado para ver como en Barcelona o Sabadell, se continúan parando desahucios a pie de puerta para frenar la expulsión de familias de sus propias casas en plena pandemia. Unos desahucios que siguen adelante en buena parte por la falta del certificado de vulnerabilidad social (necesario para parar el proceso) que, de media, tarda tres meses en llegar a manos de las familias más vulnerables por parte de los servicios sociales.

Aún así, es cierto que buena parte de los desahucios han sido paralizados. Una medida que ha sido arrancada al Gobierno y Administración gracias a la presión popular del movimiento por la vivienda. Pero, ¡atención! paralizados, no es lo mismo que haber acabado con los desahucios. Es decir, únicamente se han aplazado hasta el fin del Estado de Alarma. Eso quiere decir que, como ya pasó en junio, una vez superada la primera ola de la pandemia, el desconfinamiento se traducirá en una avalancha de desahucios.

Lo mismo ha pasado con los suministros



Los desahucios siguen en plena pandemia.

energéticos. El Gobierno ha aprobado prohibir el corte de suministro energético por vulnerabilidad social però no ha movido ni un dedo para evitar y arreglar los cortes de luz en una de las olas de frío más crudas de las últimas décadas. Y aún menos, para regular el precio de la luz, que ha experimentado un pico récord. Entonces es necesario preguntarnos: ¿de qué sirve aprobar un decreto que paralice los cortes de suministros si después en plena ola de frío, miles de familias de los barrios más pobres de ciudades como Barcelona o Badalona, se quedan sin luz durante días o si, para las trabajadoras más precarias, no pasar frío es un lujo?

Por si fuera poco, a cambio de paralizar los desahucios, el autoproclamado Gobierno “más progresista de la historia” se compromete a pagar con dinero público a los bancos, fondos buitres y grandes propietarios de viviendas afectados por la suspensión de los desahucios. En otras palabras, a rescatarlos... a un precio mayor del que conseguirían si los procesos de desahucios siguieran adelante.

Así pues, mientras las familias de trabajadores/as afectadas por EREs y ERTes o precariedad laboral continúan sin ayudas reales y abandonados a su suerte con un futuro bien negro, el Gobierno “más progresista de la historia” se dedica a rescatar a los especuladores, máximos responsables de la crisis económica y habitacional que estamos viviendo. Además, sabiendo que en unos pocos meses los desahucios se reanudarán. Doble victoria para la banca, fondos buitres y

grandes propietarios.

¿Por qué no destinan nuestro dinero en ayudas sociales reales para la clase trabajadora y el pueblo pobre? ¿Por qué no se expropiaban los pisos vacíos a bancos y constructoras?

Son preguntas que este Gobierno nunca responderá. Porque estamos ante un Gobierno que saca pecho y se autocorona por aparentes medidas sociales que sólo maquilan su esencia: la de un Gobierno lacayo al servicio de la banca y la patronal.

Con estas medidas parciales buscan relajarnos y desmovilizarnos en la lucha por la vivienda. Pan para hoy, hambre para mañana; o mejor dicho, migajas. Es necesario decirlo alto y claro: los desahucios paralizados y los ERTes de hoy son los desahucios de mañana. Es por eso que es necesario no bajar la guardia, continuar luchando y construyendo las PAH y el movimiento por la vivienda para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Una lucha que pasa por el fin definitivo de los desahucios y los cortes de suministros energéticos y por la constitución de un parque de viviendas públicas bajo control popular mediante la expropiación de las energéticas y las centenas de miles de viviendas vacías al servicio de la especulación bancaria, de los fondos buitres y grandes propietarios.

Solo así acabaremos con los desahucios. Solo así blindaremos el acceso a un techo digno.

EE.UU.

# Lecciones del asalto al Capitolio

Tara y Marco

Workers' Voice (Sección de la LIT-CI en EE.UU.)

El 20 de enero se hacía finalmente efectiva la investidura de Joe Biden como presidente de los EE.UU. Los ojos de todo el mundo estaban puestos en este acto, especialmente después de que, alentados por el mitin de Donald Trump, en el que volvía a denunciar un no probado fraude electoral, miles de sus seguidores asaltaron el Capitolio en un episodio violento que se saldó con 5 personas muertas.

## Asalto al Capitolio ¿Intento de golpe de estado?

Durante las últimas semanas los medios de comunicación han denunciado a Trump y sus seguidores como una horda que amenaza el orden democrático en EE.UU., y Joe Biden aparece como el hombre llamado a salvarlo y restaurar la concordia y el orden.

Es fundamental combatir con firmeza todos los elementos que el Trumpismo alberga en EE.UU., pero también evitar caricaturas y profundizar en qué fue realmente el asalto al Capitolio. En contra de lo que dicen en el partido demócrata, el 6 de enero no hubo “un intento de golpe de estado”, sino más bien un disturbio y un espectáculo mediático. Esta caracterización no tiene otro objetivo que legitimar el apoyo electoral a los demócratas para restablecer el orden institucional, y de paso dar un nuevo apriete de tuercas en la represión y la restricción de la libertad de expresión.

La intención de los disturbios fue más bien la de llevar a cabo una acción propagandística para agitar a la base social y electoral del Trumpismo, y seguir aumentando la polarización social, pero no un intento de arrebatar el poder. Esto requeriría una ruptura coordinada en la cadena de mando de los aparatos de represión del estado, que no se dio.

## Trump y la división del partido republicano

La incitación de Trump a la violencia no se explica porque sea un demente. Es parte de una política consciente para agitar a su base social de cara a una futura contienda electoral. Sin embargo, es un hecho que su rechazo a condenar los actos del 6E ha creado una profunda división en el seno del partido republicano.

Algunos políticos republicanos rompieron con Trump, y poderosos grupos de presión de la burguesía con vínculos estrechos con el partido congelaron sus donaciones. Destaca el caso de la Asociación Nacional de Manufactureros (NAM), la mayor asociación de comercio multi-industrial de EE.UU., que llamó al vicepresidente Mike Pence a usar la enmienda 25 de la constitución para reemplazar al presidente.

Pero a pesar de la encrucijada en que el asalto al Capitolio pone a Trump, el Trumpismo no muestra síntomas de debilitarse, y todo apunta a que seguirá siendo una fuerza determinante, dentro o fuera del partido republicano.

Algunos datos hablan por sí solos: el 45% del electorado republicano (unos 30 millones de personas) apoya las acciones de Trump con respecto a los disturbios del Capitolio.

Pese a que debemos diferenciar entre la base social más amplia del trumpismo, que se nutre también de sectores de clase trabajadora, este movimiento facilita la proliferación y unificación de grupos neo-nazis y de extrema derecha, que, si bien no estaban bien organizados ni eran la dirección del asalto, sí que denotan un crecimiento importante, y demostraron generar simpatías dentro de sectores de la policía del Capitolio, que pese a no participar de sus acciones, tampoco las impidió.

## ¿Cómo combatir a la extrema derecha en EE.UU.?

Los grupos responsables del asalto no atentaron contra la estabilidad del régimen en EE.UU. Lo que sí expresan los acontecimientos es un salto más en la polarización social y, sobre todo, la profunda crisis del régimen democrático burgués, que se verá amplificada por las consecuencias sin precedentes de la crisis sanitaria y la tendencia depresiva de la economía, dejando un escenario desolador para la clase trabajadora estadounidense.

La respuesta de Biden frente a este fenómeno es en sí misma un ataque a la clase trabajadora. No hay que tener las miras muy largas para ver que su ley “anti-terrorista” de seguridad nacional es igualmente aplicable para reprimir a las organizaciones de la clase trabajadora.

La forma de combatir el avance de estos grupos exige avanzar en la construcción de una alternativa unitaria de la clase trabajadora que enfrente la crisis económica y sanitaria. Es a partir de los movimientos sociales, de sus sindicatos y organizaciones donde la clase trabajadora de EE.UU. y del resto del mundo debemos organizarnos para frenar el auge de la extrema derecha, con nuestra movilización y nuestra autodefensa. Es en esa tarea en la que, La Voz de los Trabajadores en EE.UU., y el resto de secciones de la LIT-CI nos encontramos.



Asalto al Capitolio en Washington

## 14-F ELECCIONES EN CATALUNYA

# ¡MOVIMENT CORRENT ROIG PRESENTAMOS UNA CANDIDATURA EN TARRAGONA!

## Corrent Roig

Después de la convocatoria de las elecciones catalanas, el aplazamiento para el día 30 de mayo y la vergonzosa intervención y suspensión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), finalmente, los comicios se mantendrán para el 14-F, en plena tercera ola, dejando la puerta abierta a aplazarlas una vez haya empezado la campaña electoral, ya que el TSJ no se pronunciará definitivamente hasta el día 8 de febrero.

Esta guerra de fechas, lamentablemente, no tiene nada que ver con la preocupación por la situación epidemiológica y el riesgo sanitario, ni está marcada por criterios de salud pública. Al contrario, responde a criterios electoralistas por parte de unos y otros, ya que esta semana se publicó la última encuesta del CIS que daba, por primera vez, la victoria electoral al PSC, aunque la reedición de un Govern de las fuerzas independentistas seguiría estando entre las posibilidades.

Estas son unas elecciones marcadas por la pandemia y el inicio de una enorme crisis económica y social. Su convocatoria viene motivada por la destitución del Presidente Torra: un grave ataque a la libertad de expresión y a la soberanía catalana, que se suma a la razia represiva de una justicia heredera del franquismo que busca venganza por el referéndum del 1 de octubre y que ahora encuentra complicidad en el Gobierno de coalición PSOE-UP. No es casualidad que, el mismo día, el TSJ inhabilitase a Bernat Solé, ex alcalde de Agramunt, por facilitar el 1-O.

No obstante, el Moviment Corrent Roig concurrirémos a las próximas elecciones catalanas con una candidatura en Tarragona. Junto con l@s compañer@s de la Asamblea de Represaliadas y Activistas, pensamos que es imprescindible una candidatura alternativa, por pequeña que sea, en los próximos comicios. Una candidatura que se desvincule de la dirección oficial independentista y defienda un programa hecho y dirigido a los trabajador@s, a la juventud y a l@s activistas y represaliad@s. Un programa que rompa con las reglas del juego institucional, que sólo nos atan de manos y pies, y que enfrente verdaderamente a los ricos y poderosos. Un programa que defienda un plan de choque frente a la pandemia, la crisis y la represión.



Presentación de la candidatura en Tarragona

## ¡CONTRA LA REPRESIÓN Y POR LAS LIBERTADES! ¡VOTA MOVIMENT CORRENT ROIG EN TARRAGONA!

La Asamblea de Represaliadas y Activistas (A.R.A) y Corrent Roig manifestamos nuestra voluntad de presentar una coalición electoral para las elecciones del 14-F.

Esta candidatura nace de la voluntad de poner en el centro la batalla contra la represión de las instituciones del Estado contra l@s luchador@s por la independencia y los derechos sociales, sin olvidar la actuación de la Consellería de Interior de la Generalitat.

Queremos poner en el centro la defensa de las represaliadas. No aceptamos las actuales reglas del juego y no queremos continuar dependiendo de las actuaciones de los dirigentes independentistas oficiales. Nos dirigimos directamente a todas las represaliadas para decirles que este proyecto está a su disposición y pueden contactar con nosotr@s en todo momento para denunciar y visibilizar sus casos.

Esta candidatura quiere ser el altavoz de quienes no nos resignamos al futuro miserable que nos condenan y rebelarnos.

Recordamos:

Si pudimos imponer y ganar el referéndum del 1-O fue por la movilización masiva y la autoorganización popular.

Si llevamos a cabo la huelga general del 3-O fue porque trabajadores y trabajadoras y el pueblo de Cataluña decidimos hacer frente a la represión contra el referéndum y defender el derecho a decidir.

Pero el Gobierno de la Generalitat, en lugar de proclamar la República catalana en aquel propicio momento, llamó a la desmovilización, permitiendo el contraataque del españolismo reaccionario, encabezado por Felipe VI, y nos condujo al callejón sin salida de las elecciones del 21-D, convocadas por Rajoy al amparo del artículo 155, en vez de rechazarlas.

Actualmente, en Cataluña tenemos más de 2.850 represaliados y represaliadas por motivos políticos, perseguidas por el Estado Español y su "Justicia", heredera del franquismo. No podemos cegarnos con falsos diálogos ni con la retórica vacía que los acompaña.

Los dirigentes independentistas han demostrado que no son capaces de llevar la lucha por el derecho a decidir hasta el final y han sido cómplices y agentes represores de las propias movilizaciones. Del mismo modo que el autodenominado "gobierno más progresista de la historia de España", también ha sido incapaz de combatir la pandemia y poner freno a la desindustrialización, al paro y la miseria creciente.